

SIMPOSIUM SOBRE CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

PROPUESTA RECIBIDA A LA 1ª SESIÓN

SUFRAGIO Y FORMACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA

LA FORMACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD POLÍTICA: SUJETOS Y MEDIOS

MODIFICAR LAS NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE PARTIDOS POLÍTICOS, QUE CONDICIONAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RELACIÓN DE REPRESENTACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN CON FINES DEMOCRÁTICOS

Autor: **Leonardo Álvarez Álvarez**, Profesor Asociado de Derecho Constitucional, Universidad de Oviedo

Propuesta: Modificar las normas de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, que condicionan la construcción de la relación de representación a la identificación con fines democráticos.

Justificación: La Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, aun cuando nace en apariencia con la intención de declarar ilícitos los partidos políticos por conductas contrarias al principio democrático, acaba por articular implícitamente un límite a la relación de representación incompatible con la Constitución Española. En efecto, la LO 6/2002, impide que puedan presentarse a las elecciones aquellos partidos políticos que persigan fines contrarios a la democracia, lo que no aparece tolerado por la Constitución. Eso se produce mediante dos técnicas propias de la democracia militante que, sin suponer abiertamente la ilegalización de fines políticos, llegan subrepticamente a ello.

La primera de tales técnicas consiste en dejar deliberadamente amplio el supuesto de hecho de la ilegalización de los partidos políticos permitiendo que, junto a actividades propiamente ilícitas, puedan encuadrarse otras que, en realidad, constituyen una legítima expresión de fines políticos. Eso es lo que sucede particularmente con el art. 9, 2 a) en el que se declaran ilícitos los partidos que, entre otras conductas, promuevan, justifiquen o exculpen la “exclusión de personas” por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Si como se desprende de la propia LO 6/2002, la “exclusión de personas” se entiende en el sentido de “aislamiento social, confrontación civil o cultura de enfrentamiento” (art. 9, 3 b), en dicho supuesto podrían encuadrarse las expresiones de ideologías que, por ejemplo, se construyesen a partir de la superioridad de una raza sobre las otras, y que deben considerarse constitucionalmente lícitas. Esto es lo que sucede, de igual modo, con la cláusula “odio contra las personas” empleada por el art. 515, 5º del Código Penal como supuesto de ilicitud penal de los partidos. El cambio podría consistir en sustituir la cláusula “exclusión de personas” del art. 9, 2a) de la LO 6/2002, de Partidos Políticos, por el “menosprecio de personas” que pone su énfasis más en el modo --lesivo del derecho al honor-- en que se manifiestan los fines políticos.

La segunda de las técnicas empleadas por la LO 6/2002, de Partidos Políticos es crear una presunción iuris et de iure entre fines políticos y ciertos medios utilizados, de ordinario, en su persecución que son los que se consideran como ilícitos. Esto es lo que sucede en el art. 9, 3 d) al establecer como uno de los supuestos de ilicitud de los partidos políticos el empleo de símbolos, mensajes o elementos que, con carácter general, se identifiquen con el terrorismo o la violencia. El problema es que la Ley permite crear una presunción que no admite prueba en contrario haciendo que la persecución de determinados fines se identifique, en todo caso, con medios, los que traslucen de los símbolos, mensajes o elementos, que se han asociado con la violencia, impidiéndose que aquellos puedan llegar a ser perseguidos aunque sea a través de medios pacíficos. El cambio, que habría de extenderse a otras normas de la LO 6/2002 como el art. 9, 3 a), tendría que consistir en plasmar una presunción iuris tantum, dejando claro que la ilicitud sólo tiene lugar en aquellos concretos casos en los que los símbolos, mensajes o

elementos inciden directamente al terrorismo o a la violencia. De esta manera, se garantiza un espacio en el cual los fines, aun cuando de ordinario perseguidos a través de medios violentos, puedan manifestarse lícitamente, tal y como exige la Constitución.